

## ECONOMÍA / POLÍTICA

## Los 8 retos del nuevo curso, sin rumbo

INCERTIDUMBRE / España enfila un otoño de máxima tensión política, con dos posibles investiduras, sin descartar el riesgo de una

J. Díaz, Madrid

Tras un verano tan anómalo como frenético en lo político, con unas elecciones generales en plena temporada estival y la constitución de las Cortes a mitad de agosto, y que anticipa un otoño frío en lo económico, España ha arrancado el nuevo curso. Lo ha hecho sin rumbo claro ni un Gobierno definido que pueda afrontar los múltiples retos a los que se enfrenta el país, sumido en un carrusel de crisis desde la tormenta financiera, a la que después sucedieron el *shock* del Covid y la guerra en Ucrania, que trajo consigo fuertes vientos de inestabilidad geopolítica y ha golpeado a la economía internacional con un torbellino inflacionario y una crisis energética que, aunque atemperados, siguen al acecho. Los esfuerzos del BCE por controlar la fiebre inflacionista mediante una terapia de choque de subidas de tipos han empezado a surtir efecto, pero a cambio se han deteriorado las expectativas de crecimiento de la zona euro.

Ese es el sombrío horizonte que se perfila en el exterior. De puertas adentro, al rosario internacional de amenazas se suma el nebuloso escenario político interno, de indefinición, bloqueo y máxima polarización, con un Gobierno en funciones cuya capacidad de actuación es limitada; con dos investiduras en el horizonte, la de Alberto Núñez Feijóo el 26 y 27 de septiembre y, si ésta fracasa, como parece probable, la de Pedro Sánchez, determinado a reeditar su Gobierno de coalición de la mano de populistas, nacionalistas e independentistas, cuyos votos serán más determinantes que nunca. Si Sánchez, que hoy arranca el curso como presidente en funciones con un desayuno en el Ateneo de Madrid, tampoco logra ser investido antes del 27 de noviembre, en un escenario en el que el precio de salida de los separatistas es una amnistía para los condenados por el *procés* y el compromiso de avanzar hacia un referéndum, España se vería abocada a la repetición electoral, como ya sucedió en 2019, entonces con Sánchez al timón de los socialistas y Pablo Casado al del PP.

Con este inestable telón de fondo, España emprende este mes una nueva etapa política y económica marcada por la

### Feijóo irá a la investidura el 26 y 27 de septiembre y si fracasa, será el turno de Pedro Sánchez

zozobra y la inseguridad. Estos, con el Congreso partido en dos grandes bloques políticos antagónicos e incapaces de pactar, como quedó en evidencia en el infructuoso encuentro mantenido el pasado miércoles por Sánchez y Feijóo, en el que el líder socialista dio un sonoro portazo a la propuesta del presidente del PP de una legislación corta de la lista más votada, la suya, y sustentada en seis grandes pactos de Estado para evitar que el futuro de España dependa del secesionismo, en especial, de un prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont. A ello se suma un Gobierno en funciones y, por tanto, mercedado en sus capacidades; en plena presidencia de turno del Consejo de la UE, y con el futuro del país en el aire. Todo ello en un contexto de importantes desafíos económicos, que España afronta con un Ejecutivo provisional y sin capacidad para aprobar nuevas políticas ni cuentas públicas.

### Hacia la prórroga presupuestaria

Precisamente, una de las primeras víctimas de la situación de bloqueo serán los Presupuestos Generales del Estado, virtualmente abocados a la prórroga, al menos durante unos meses. Aunque la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, aseguró recientemente que “la voluntad del Gobierno es poder aprobar los presupuestos en tiempo y forma”, el retraso se antoja inevitable ante los tiempos institucionales que ha abierto el escenario político, con dos probables investiduras en el horizonte y un Ejecutivo sin plenas funcionalidades que, para poder sacar adelante las cuentas en plazo, debería presentar el proyecto de ley antes de finales de septiembre; esto es, coincidiendo con el debate de investidura de Feijóo. Una misión difícilmente factible y aún menos cuando Hacienda no contempla fijar un nuevo techo de gasto no financiero

para 2024 hasta que no se conforme un nuevo Ejecutivo. El límite de gasto es el paso previo a la elaboración de las cuentas públicas y establece las pautas para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Esto significa que el Ejecutivo en funciones no podrá lanzar nuevos proyectos que conlleven un aumento del gasto, aunque a priori sí podrá ampliar el gasto corriente en determinadas partidas para hacer frente, por ejemplo, a la revalorización de los salarios de los funcionarios o de las pensiones.

La prórroga presupuestaria tampoco impedirá las entregas a cuenta a las CCAA (otra cosa es su actualización), pero sí mianará la capacidad del Gobierno para acometer nuevas iniciativas, en un escenario en el que las reglas fiscales en Europa saldrán de la hibernación en que se encuentran desde 2020, obligando a los Estados miembros a apretarse el cinturón para reducir sus niveles de déficit y deuda.

### Financiación de las CCAA y ¿quititas?

Otro de los grandes retos de la legislatura, sea del color político que sea el futuro Gobierno, será abordar la largamente postpuesta reforma del sistema de financiación autonómica. El actual modelo lleva caducado desde 2014 entre el clamor generalizado de las CCAA por una renovación que los sucesivos gobiernos, cuyos mandatos se han visto jalonados por un rosario de crisis en la última década, no han podido, o no se han atrevido, a afrontar. El debate ha retornado al primer plano político de la mano del PSOE en busca del apoyo de nacionalistas e independentistas para, si finalmente resulta fallida la investidura de Feijóo, erigir presidente a Pedro Sánchez. La cuestión es que las exigencias de los separatistas catalanes van ahora mucho más allá de la financiación territorial y apuntan a una amnistía y al compromiso de avanzar hacia un referéndum de independencia. Son cuestiones que, aunque inasumibles para el Estado de Derecho, ya han provocado un efecto contagio en el nacionalismo vasco. El jueves, el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, no dudó en



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al líder del PSOE, Pedro Sánchez, al inicio de la reunión que man-

aprovechar la ventana que el PSOE parece dispuesto a abrir en Cataluña para plantear una reinterpretación de la Constitución que permita avanzar hacia un Estado “plurinacional”, propuesta de dudoso encaje constitucional que ya ha hecho saltar las alertas en el resto de CCAA.

En el contexto de esa reforma pendiente de la financiación autonómica, la posible condonación, total o parcial, de la deuda que Cataluña y otras CCAA tienen con el Estado se extendió como un reguero de pólvora en agosto, provocando la reacción en cadena de varias autonomías, ahora en su mayoría regidas por el PP, que rechazaron de plano eventuales “tratos de favor” a Cataluña, reclamando un trato igualitario y sin agravios para todas las regiones. El debate está servido en el marco de un cambio de modelo tan necesario como difícil y controvertido. Las CCAA deben nada menos que 187.000

millones al Estado, de los que 71.852 millones corresponden a Cataluña, la autonomía más endeudada con la Administración Central. Una quita, aunque fuera parcial, solo serviría para engordar el agujero de las cuentas públicas estatales en plena reactivación de la disciplina fiscal en Europa.

### Segunda reforma de las pensiones

Con un Gobierno en plena conformación, si es que el bloqueo político no acaba en repetición electoral, entrará en vigor a primeros de enero de 2024 la controvertida segunda parte de la reforma de las pensiones, uno de los hitos marcados en el pacto rubricado con Bruselas para recibir el cuarto pago de los fondos europeos. Amén de que todas las pensiones se revalorizarán siempre con el IPC, a partir del año que viene y hasta 2027 las mínimas lo harán por enci-

ma de la inflación hasta alcanzar el 60% de la renta mediana en España. También subirán por encima del promedio las pensiones no contributivas por jubilación e invalidez. En un sistema sobrecargado y cuya nómina bate cada mes su récord de gasto (más de 12.039 millones en agosto), la reforma impulsada por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, fía el aumento de los ingresos necesario para afrontar ese ingente y creciente gasto a la subida de las cotizaciones sociales; esto es, a un nuevo hachazo a las empresas y, en menor medida, a los trabajadores, con el que el Ejecutivo socialista aspira a ingresar hasta 130.000 millones de aquí a 2043 o 2044. Sin embargo, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya advirtió el pasado mayo que las medidas de ingresos contempladas en las reformas de las pensiones “serán insuficientes para compensar el

# político y frío en lo económico

repetición electoral, y un Ejecutivo interino con capacidades mermadas para afrontar los desafíos de una economía que se enfría.



tuvieron el miércoles de la semana pasada en el Congreso.

creciente gasto que soportará el sistema". Mientras que si es Sánchez quien reedita su mandato la perspectiva es aún de mayor gasto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, prometió en su día abordar una nueva reforma del sistema para afianzar su sostenibilidad, aunque -eso sí- sin desmarcarse de la revalorización de las prestaciones con el IPC.

## La reforma fiscal que no llegó

La disolución de las Cortes dejó en el tintero la largamente anunciada reforma tributaria del Gobierno de coalición, que nunca llegó, más allá de los impuestos temporales y extraordinarios aplicados a la banca, las energéticas y las grandes fortunas, gravámenes que han provocado una oleada de recursos ante los tribunales. Pendiente queda la profunda revisión prometida por el Ejecutivo, cuyos avances en este ámbito

se redujeron esencialmente a la aprobación y publicación del *Libro Blanco Para la Reforma del Sistema Tributario*. Es otro miura que el futuro Gobierno deberá coger por los cuernos. Si el actual Ejecutivo de coalición repite mandato, como parece probable, su principal receta será continuar elevando la presión fiscal sobre las rentas y patrimonios más altos para financiar sus promesas de creciente gasto social, mientras que Feijóo, durante la campaña electoral, prometió justo lo contrario: aliviar la presión fiscal a familias y empresas mediante "una política fiscal no confiscatoria" que combine bajadas impositivas con "equilibrio presupuestario". Eso sí, anticipó que, de llegar a Moncloa, si bien reformaría los tributos a bancos y

**La situación política aboca a la prórroga presupuestaria en 2024, al menos durante unos meses**

energéticas, no los eliminaría.

## Enfriamiento económico

El futuro Ejecutivo tendrá que lidiar con un entorno de gradual enfriamiento de la economía internacional al que no es ajeno España. Un constipado que amenaza con ser especialmente severo en la UE, donde la caída de la actividad industrial ha terminado contagiando al sector servicios y anticipa ya una contracción del PIB del 0,2% en el tercer trimestre, según los índices PMI más recientes. Ese frenazo y marcha atrás de la economía tiene su origen en parte en la agresiva política monetaria del BCE, cuyas rápidas y abruptas subidas de los tipos de interés (hasta el 4,25% en su última reunión) para desinflar la burbuja inflacionista han terminado deprimiendo la demanda interna.

El consumo de las familias, golpeadas por el encarecimiento de la financiación y de las hipotecas, además de por el latigazo de la inflación, se ha encogido y ello ha provocado un efecto dominó en la producción industrial y ahora también en los servicios, que venían resistiendo mejor las embestidas del nuevo bache gracias al sector turístico. A eso se suma la debilidad de la demanda externa en un escenario internacional marcado por la persistencia de la guerra en Ucrania "y el aumento de las tensiones geopolíticas generales, que podrían fragmentar el comercio mundial y lastrar, por tanto, la economía de la zona del euro", advirtió el BCE en su último boletín económico. Y si Europa se resfría, España también estornuda; no en vano, el grueso de sus exportaciones tiene como destino el bloque comunitario. De hecho, ya lo está haciendo. La cifra de negocios de las empresas españolas cayó un 8,7% anual en junio y la del sector servicios un 0,9%, mientras que las exportaciones, el gran pulmón de la economía nacional, encadenaron en abril, mayo y junio tres meses con variaciones anuales negativas. Ante este nuevo túnel, España parte además rezagada. No solo ha sido una de las últimas economías desarrolladas en recuperar los niveles pre-Covid, hito que el Gobierno dio por alcanzado en

## La financiación de las CCAA y la posible quita de deuda a Cataluña, una gran patata caliente

el primer trimestre y que, según la OCDE, no se produjo en realidad hasta el segundo, sino que, además, su PIB se encuentra 4,7 puntos por debajo del promedio de los países de la Organización respecto a la pandemia.

## Niebla sobre los fondos europeos

La interinidad del Gobierno y la falta de visibilidad política a corto plazo han sembrado dudas sobre futuros desembolsos de fondos europeos. Grandes firmas internacionales como S&P Global alertaron semanas atrás de que el actual interregno político puede dejar varadas de forma coyuntural algunas de las reformas clave pactadas con Bruselas y que son esenciales para recibir nuevas dosis del maná europeo. Todo ello en un contexto en el que la convocatoria anticipada de las elecciones generales del 23-J ya provocó un frenazo en la ejecución del Plan de Recuperación. De hecho, el volumen de fondos comprometidos en el primer semestre del año con cargo al *Next Generation* rondó los 7.700 millones, la mitad que en el segundo semestre de 2022 (15.500 millones). A ello se suma que las ayudas comunitarias siguen sin irrigar como debieran el tejido productivo, por lo que su llegada a la economía real es limitada, en buena parte debido a una serie de factores que disuaden a muchas empresas de solicitar fondos: la complejidad burocrática de los proyectos; unos plazos de presentación ajustados; las dificultades para identificar y tramitar las ayudas, especialmente para las empresas pequeñas, o el hecho de que gran parte del tejido productivo, integrado por pymes y micropymes, no tiene músculo para abordar la cofinanciación de proyectos. El Ejecutivo en funciones dejó en suspenso la solicitud del cuarto pago de los fondos por el adelanto electoral e incluso podría verse afectado el quinto si finalmente el país se ve abocado a la repetición de los comicios. En total,

están en liza 17.000 millones. Siguen su curso, aunque lejos del tirón esperado inicialmente, los proyectos estratégicos en marcha, como el Perte VEC II, dotado con 1.409 millones, destinado a la cadena de valor industrial del vehículo eléctrico y que ha suscitado bastante mayor interés que la primera fase, en la que quedaron sin repartir 2.200 millones. Por contra, el Perte Chip, el mayor dotado de todos los proyectos estratégicos, aún sigue en pañales, con apenas 275 millones transferidos (que no ejecutados) en la primera fase del Plan de Recuperación sobre una dotación total de 12.250 millones. Sin olvidar los 94.000 millones solicitados en la adenda del Plan de Recuperación, de los que la mayoría serían créditos blandos y que también habrá que gestionar y digerir.

## Presidencia española de la UE

El adelanto electoral se produjo en vísperas del inicio de la presidencia española de turno del Consejo de la UE y los comicios se celebraron apenas tres semanas después de tomar la batuta europea. Aunque la neblina política no es el mejor entorno para impulsar los objetivos del semestre europeo, entre los que sobresalen la reindustrialización de la UE y el refuerzo de su autonomía estratégica; avanzar en la transición ecológica y digital, y fortalecer la unidad europea ante la amenaza que supone la agresión de Rusia a Ucrania, la decisión del Rey de encomendar a Alberto Núñez Feijóo el primer intento de formar Gobierno ha otorgado a Pedro Sánchez un tiempo precioso para ejercer la presidencia europea mientras espera el naufragio del líder del PP y sus equipos negociadores hilvanan la mayoría que necesita para su investidura. Mientras de puertas adentro el PSOE negocia la reedición de su mandato, Sánchez amplificará aún más su imagen internacional al frente del Consejo de la UE, en el marco de una presidencia rotatoria que tendrá su gran hito en la cumbre que se celebrará en Granada los días 5 y 6 de octubre. Una reunión de alto nivel que congregará a una cuarentena larga de dirigentes europeos: los mandatarios de los 27 Estados miembros más

los de casi otra veintena de países con estrechos lazos con el bloque, y que convertirán España en un gran escaparate de cara a Europa y al resto del mundo. En el marco de esa apuesta internacional de España, el Ecofin decidirá el 15 y 16 de septiembre sobre la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Banco Europeo de Inversión (BEI), carrera en la que su principal rival es Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia. Previamente, el 13 y 14 de septiembre, el Consejo del BCE se pronunciará sobre la candidatura de Margarita Delgado, actual subgobernadora del Banco de España, para la presidencia del Mecanismo Único de Supervisión europeo (MUS).

## Independentismo "envalentonado"

La debilidad parlamentaria de Sánchez, que necesitará, si o sí, los votos del separatismo catalán para reeditar su mandato si la investidura de Feijóo finalmente naufraga, ha inflamado los ánimos del movimiento independentista o, como dijo el miércoles pasado el líder del PP, lo ha "envalentonado", ante la perspectiva de ver cumplidas al menos parte de sus exigencias. Estas pasan por una amnistía a los condenados por el *procés*, con efectos retroactivos a la consulta del 9-N de 2014 orquestada por el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas, y por avanzar por la senda que en el futuro conduzca a un referéndum de autodeterminación. La primera gran toma de temperatura al secesionismo tendrá lugar el 11 de septiembre con la celebración de la Diada, que se producirá en medio de las negociaciones para la futura investidura de Sánchez y que permitirá medir cuánto se ha acelerado el pulso separatista tras la pérdida de seguimiento de esta manifestación en los últimos años. Los apretados resultados del 23-J han dejado la llave de la gobernabilidad de España en manos de la marea independentista, y la Diada visibilizará hasta qué punto ha aparcado sus diferencias internas para unificar la presión sobre Sánchez y, a partir de ahí, hasta dónde está éste dispuesto a ceder.